



RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NÚMERO 79824

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

1º. Con fecha 19 de mayo de 2023 tuvo entrada en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, formulada por D. [REDACTED] y registrada con el número de expediente 001-079824, cuyo contenido es el siguiente:

“Tras el expediente 00001-00078741 se me facilitó un listado con la deuda de otros países hacia España. Solicito ahora conocer para cada uno de estos países el motivo por el que tiene esa deuda hacia España (España le realizó un préstamo tras un acuerdo entre ambos países, España le prestó dinero a través de otros mecanismos concretos o lo que corresponda, de la forma más precisa posible), si está al corriente de pagarla o no y en el caso de cumplir los plazos para devolverla cuándo acabaría de pagarla. Solicito, además, que en el caso de los que no están al corriente de pagarla se me indique desde cuándo no están devolviendo la deuda y si debido a ello se les va a sumar intereses o no. Solicito toda la información en formato reutilizable tipo .csv o .xls”.

2º. El 22 de mayo de 2023 se dio traslado de esta solicitud a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, fecha a partir del cual comienza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución.

3º. Una vez analizada la solicitud, y habiendo concluido que parte de la información requerida no supone perjuicio alguno en relación a los supuestos contenidos en el artículo 14.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre los límites al derecho a de acceso a la información, este órgano considera procedente admitir parcialmente la solicitud de acceso a la información que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución.

4º. Por tanto, ateniéndose a lo expuesto anteriormente, en respuesta a la solicitud recibida se procede a proporcionar la siguiente información:

- El detalle de la deuda ostentada por España con respecto a cada uno de los países con los que mantiene una posición acreedora. Esta deuda es gestionada por la Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y la Financiación Internacional atendiendo a la siguiente taxonomía en función de su origen, distinguiendo entre:
 - Deuda FIEM, que es la originada por las operaciones de préstamos realizadas con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).
 - Deuda FONPRODE, que es la originada por las operaciones relativas al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).



- Deuda Comercial, que es la originada una vez se produce un impago por parte del deudor en relación con las operaciones aseguradas por cuenta del Estado por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
- Otros tipos de deuda: aquella deuda que no se corresponde con las categorías previamente mencionadas.

Esta información se facilita en formato Excel de acuerdo con la petición realizada por el interesado.

- En relación con la cuestión de “si está al corriente de pagarla o no” se proporcionan las siguientes aclaraciones:

La deuda ostentada por el Estado español en calidad de acreedor se constituye en derechos de cobro que éste posee frente a terceros. En el caso de las operaciones del FIEM, FONPRODE y “otros tipos de deuda”, esos derechos se traducen en una serie de obligaciones de pago que los deudores deben satisfacer, de acuerdo con un calendario preestablecido entre ambas partes. Los impagos surgen cuando, alcanzada la fecha de vencimiento de un determinado pago estipulado, éste no es atendido por el deudor. Por tanto, deben distinguirse los impagos de los pagos pendientes de vencimiento, pues estos últimos no reflejan incumplimientos contractuales, al tratarse de cantidades aún no exigibles.

En el caso de la deuda comercial, derivada de operaciones de cobertura por parte de CESCE del riesgo por cuenta del Estado de operaciones de apoyo a la internacionalización, esta deuda nace del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del deudor y genera una indemnización del Estado al asegurado, que pasa a poseer derechos de cobro frente al deudor. La deuda comercial tendrá, por tanto, la consideración de impagada con carácter general, y únicamente se reclasificará como deuda pendiente de vencimiento en caso de que se pacte una reestructuración de ésta que establezca un nuevo calendario de vencimientos.

Sin embargo, no todos los impagos tienen la misma naturaleza. En particular puede distinguirse entre:

- Impagos técnicos. Con carácter general, tendrán esta consideración aquellos impagos que no excedieran en más de 30 días la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago a las que están asociados. La razón por la que se aconseja segregar los impagos que cumplen esta condición es porque una gran parte de los mismos acaban dándose de baja en un corto periodo de tiempo, al deberse a incidencias técnicas relacionadas con el proceso de pago (retrasos en las transferencias, problemas de conciliación de cifras, etc).



- Impagos de hecho. Se corresponde con incumplimientos contractuales que no se corresponden con incidencias técnicas.

La información relativa a los impagos es una información muy sensible, especialmente para los países que se encuentran en esta situación, por cuanto puede tener efecto sobre sus relaciones económicas y comerciales con otros acreedores, ya existentes o potenciales. Un uso inadecuado de esta información podría poner en riesgo la financiación de un determinado país, con las consecuencias indeseables que esa situación podría tener sobre su población, por lo que se perjudicaría el cumplimiento de la propia Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, cuya finalidad es precisamente la del alivio de la situación financiera de los países más pobres. Por otro lado, la vinculación de la política de gestión de la deuda externa con la política y relaciones exteriores de España resulta reconocida por la propia Ley 38/2006, que en su artículo 1.2 establece que “El objetivo de la presente Ley es que la gestión de la deuda externa española esté vinculada con la política de cooperación española, conforme a las prioridades y estrategias del Plan Director de la Cooperación Española, se integre activamente en el marco multilateral internacional, sea solidaria con los países en desarrollo y consistente con la política de la Hacienda Pública”. Así las cosas, revelar información relativa a la situación de impagos de terceros países pondría en riesgo las relaciones exteriores de España y podría afectar a los intereses económicos y comerciales, por lo que es de aplicación lo establecido en los apartados c) y h) del artículo 14.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre los límites al derecho de acceso a la información.

A estos efectos, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de octubre de 2020 (RA 34/2020) dispuso:

“No obstante, el artículo 14.1 de la misma normativa establece que “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: c) las relaciones exteriores”, señalando el número 2 que “La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

A estos efectos, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017, dictada en el recurso 75/2017, ya indica que “las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas.



En este contexto, si la Administración considera que la información solicitada puede interferir o poner en riesgo las relaciones exteriores, en este caso con la Santa Sede, la Ley permite establecer límites a la información interesada, razonando concretamente las causas que impiden acceder a la misma, eso sí, justificando la Administración el porqué de la limitación”.

- Con respecto a “y en el caso de cumplir los plazos para devolverla cuándo acabaría de pagarla” se proporciona la siguiente información.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la deuda de los diferentes países puede provenir de una variedad amplia de préstamos diferentes, cada uno de los cuales tiene un calendario de amortización preestablecido, por lo que, para saber cuándo un determinado país terminaría de pagar su deuda, habría que referirse al préstamo que tuviera el plazo de amortización más alejado en el tiempo.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la exposición con diferentes deudores es dinámica en el tiempo y sufre variaciones como consecuencia de la consecución de diferentes acuerdos de financiación, por lo que, lo normal, es que, a medida que se amortiza nueva deuda, se contraiga nueva y que, por tanto, los plazos para amortizar la exposición se dilaten paulatinamente en el tiempo.

La información relativa a los plazos de amortización de los diferentes préstamos constituye información sensible que puede afectar a las relaciones económicas y comerciales de España con terceros países. Esta consideración deriva de que el conocimiento, por parte de terceros países competidores, de los términos aplicados por España en la formalización de los contratos de préstamo relacionados con los instrumentos financieros para la internacionalización podría suponer un importante perjuicio para la economía española, ya que se estaría revelando la posición negociadora relativa a su estrategia en dicho ámbito.

Adicionalmente, la información relativa a los plazos de amortización negociados en acuerdos de reestructuración de carácter multilateral está sujeta al principio de confidencialidad recogido en los principios del Club de París. Esta obligación de confidencialidad se establece para proteger los intereses de los países involucrados en las negociaciones y para permitir que se lleven a cabo de manera efectiva.

Además, la obligación de confidencialidad en las deliberaciones del Club de París es una norma internacionalmente reconocida y aceptada, que refleja la necesidad de proteger la información sensible y confidencial en las negociaciones internacionales.

Cada vez que un país se adhiere al Club, se compromete formalmente, mediante un intercambio de cartas entre sus autoridades y la presidencia del Club de París (actuando ésta en nombre de todos los miembros del Club) y la posterior firma de un acta, al respeto de esas normas básicas de funcionamiento.

En este sentido, revelar información relativa al plazo de vencimiento de las deudas de terceros países con España podría afectar a los intereses económicos y



comerciales de España y a la garantía de la confidencialidad para el buen fin de las negociaciones en el Club de París, por lo que es de aplicación lo establecido en los apartados c) y h) del artículo 14.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre los límites al derecho de acceso a la información.

- Finalmente, en relación con la cuestión “en el caso de los que no están al corriente de pagarla se me indique desde cuándo no están devolviendo la deuda y si debido a ello se les va a sumar intereses o no”, cabe apuntar que, por norma general, los contratos contienen cláusulas que hacen referencia a los intereses de demora en los que incurrirá el deudor en caso de que este no cumpla en tiempo y forma con los compromisos adquiridos. Estos intereses de demora son adicionales a los intereses ordinarios que genere el préstamo en cuestión.

Al igual que se apuntaba en el apartado relativo a “si está al corriente de pagarla o no”, revelar la fecha desde cuando no se está devolviendo una determinada deuda supondría revelar información relativa a la situación de impagos de terceros países pondría en riesgo las relaciones exteriores de España y podría afectar a los intereses económicos y comerciales, por lo que es de aplicación lo establecido en los apartados c) y h) del artículo 14.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre los límites al derecho de acceso a la información.

5º. En base a lo anterior, y de acuerdo con los supuestos recogidos en los apartados c) y h) del artículo 14.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre los límites al derecho de acceso a la información, este órgano desestima proporcionar información detallada sobre los calendarios de repago de cada una de las operaciones formalizadas, así como de la estructura de intereses asociada a las mismas por motivos de perjuicio para las relaciones exteriores y los intereses económicos y comerciales de España.

6º. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 11 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente por:

EL SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

[Firma electrónica]